

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C. diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	11001 33 35 029 2022 00397 00
DEMANDANTE:	ADOLFO ELEAZAR ROJAS PACHECO
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
CONTROVERSIA:	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Ocupa al Despacho el estudio de la conciliación extrajudicial de la referencia, en aplicación de los artículos 59 de la Ley 23 de 1991, 70 de la Ley 446 de 1998 y 49 de la Ley 640 de 2001, para determinar si es competente para conocer del asunto, y de ser así, establecer si debe aprobar o improbar dicho acuerdo conciliatorio.

I. ANTECEDENTES

El señor ADOLDO ELEAZAR ROJAS PACHECO, actuando por intermedio de apoderado judicial, llama a conciliación a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, para conciliar el pago de la sanción causada por la mora en el pago de las cesantías, conforme a lo normado en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006.

El conocimiento de la solicitud de conciliación prejudicial le correspondió a la Procuraduría 135 Judicial II para Asuntos Administrativos.

II. HECHOS

1. El 3 de mayo de 2019, el señor Adolfo Eleazar Rojas Pacheco, solicitó el reconocimiento y pago de la cesantía parcial.

2. La Secretaría de Educación de Bogotá – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Resolución No. 6660 del 10 de julio de 2019, reconoció y ordeno pagar la prestación solicitada.

3. La entidad dejó a disposición el dinero para el pago de la prestación el 28 de agosto de 2019.

III. ACTUACION PROCESAL

1. Por intermedio de apoderado judicial, el señor ELEAZAR ADOLFO ROJAS PACHECO, elevó solicitud ante la Procuraduría Judicial II - Reparto para Asuntos Administrativos, con el fin de que le fuera cancelada la sanción legal establecida por la mora en el pago de las cesantías parciales solicitadas.

2. Por Reparto la conciliación correspondió a la Procuraduría 135 Judicial II para Asuntos Administrativos, quien por auto de fecha del 20 de abril de 2022, dio inicio al trámite de solicitud de conciliación prejudicial teniendo como convocado al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y admite la solicitud de conciliación extrajudicial.

3. Finalmente, el trece (13) de julio hogaño, se llevó a cabo la audiencia de conciliación.

IV. PRUEBAS

Obran como pruebas que fundamentan la conciliación extrajudicial, las siguientes:

1. Solicitud de conciliación extrajudicial de la convocante, poder otorgado al abogado Julián Andrés Giraldo Montoya, y documentos del poderdante y apoderado.
2. Resolución No. 6660 del 10 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaria de Educación de Bogotá, reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial al docente Adolfo Eleazar Rojas Pacheco.
3. Comunicación del 15 de diciembre de 2021, de la Fiduprevisora S.A. con referencia Solicitud de certificación de pago de cesantía, en donde se señala que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio programó pago

- de cesantía parcial reconocida en resolución No. 6660 del 10 de julio de 2019, quedando los recursos a disposición el 28 de agosto de 2019.
4. Derecho de petición elevado por el convocante Adolfo Eleazar Rojas Pacheco, a la entidad convocada solicitando el pago de la sanción moratoria.
 5. Acuerdo conciliatorio suscrito por el Procurador 35 Judicial II para Asuntos Administrativos y los apoderados de las partes.

V. ACUERDO CONCILIATORIO

El acuerdo conciliatorio cuya aprobación se pretende, está contenido en Acta de Conciliación Extrajudicial con Radicación No. 153407/043-2022 del 18 de marzo de 2022.

En aquella diligencia de conciliación, se concedió el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante, quien manifestó:

“Las pretensiones de la solicitud son:

PRIMERO: *Declarar la nulidad del Acto ficto o presunto frente a la petición radicada ante la entidad, mediante la cual niega el reconocimiento de la SANCIÓN POR MORA, en el pago de las cesantías de la siguiente manera:*

Nombre Docente	No. de Cédula	Fecha del Agotamiento	Fecha acto Ficto
Adolfo Eleazar Rojas Pacheco	88.224.422	16 de diciembre de 2021	16 de marzo de 2022

SEGUNDO: *El reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la ley 1071 de 2006 a mis mandantes, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía parcial y/o definitiva ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.*

TERCERO: *Que sobre el monto de la SANCIÓN POR MORA reclamada, se ordene el reconocimiento de la respectiva indexación hasta la fecha en que se efectúe el pago de esta obligación a cargo de la convocada”.*

La apoderada de la parte convocada LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, indicó

la decisión tomada por el comité de conciliación de la Entidad en relación con la solicitud incoada, en los siguientes términos:

“De conformidad con las directrices aprobadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional , las cuales se encuentran recogidas en el Acuerdo No. 001 de 1 de octubre de 2020 «Por medio del cual se recogen las políticas, lineamientos, directrices, parámetros y reglas aprobados por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional en asuntos relacionados con la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio » aprobado en sesión No. 41 de 1 de octubre de 2020 , modificado por el Acuerdo No. 001 de 4 de mayo de 2022 «Por el cual se modifica el Acuerdo No. 001 de 1 de febrero de 2021», y conforme al estudio técnico presentado al comité de conciliación en el cual se informó que no se han realizado pagos administrativos por concepto de la obligación de que trata la presente certificación, la posición del Ministerio es CONCILIAR en la audiencia programada por el Despacho con ocasión a la convocatoria a conciliar promovida por los abajo convocantes en contra de la NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG , cuya pretensión es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías (CESANTÍA PARCIAL PARA ESTUDIO) reconocidas mediante Resolución No. 3257 de 12 de abril de 2019 .

Los parámetros de la propuesta son los siguientes:

Convocante	Cédula	Resolución	Decisión	Valor
Adolfo Eleazar Rojas Pacheco	88.224.422	6660	Conciliar	\$1.366.260

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, numerales 3.2 y 3.5 del Acuerdo No. 001 de 1 de octubre de 2020, la presente propuesta se encuentra estructurada conforme a la información suministrada en la convocatoria a conciliar, en razón a que la sanción moratoria es un derecho de carácter discutible y conciliable, que se reclama a través de la denominada justicia rogada. Lo anterior, atendiendo a que corresponde a las entidades estatales la salvaguarda del patrimonio público.

Tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación: 1 MES (DESPUÉS DE COMUNICADO EL AUTO DE APROBACIÓN JUDICIAL). No se reconoce valor alguno por indexación.

La presente propuesta de conciliación no causará intereses entre la fecha en que quede en firme el auto aprobatorio judicial y durante el mes siguiente en que se haga efectivo el pago.

Se paga la indemnización con cargo a los títulos de tesorería de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) y el Decreto 2020 de 2019, y de acuerdo con la adición presupuestal de \$440.000.000.000 aprobada por el Consejo Directivo de FOMAG en sesión ordinaria de 9 de diciembre de 2019.”

Frente a la propuesta de conciliación, la parte Convocante, expresó:

“En efecto nosotros ya habíamos analizado cuidadosamente cada una de las propuestas, nosotros en estos casos acatamos las propuestas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, dado que la Entidad está reconociendo el 100% de lo pretendido, ahora bien, la pequeña diferencia existente en algunos casos frente a los días corresponde al sistema de conteo interno, siendo la correcta la liquidación propuesta por la Entidad y en ese orden de ideas, estamos de acuerdo con los días de mora y el valor reconocido de mora, por lo que se reitera la aceptación de la propuesta en los términos propuestos para los veintisiete (27) casos. (...)”

En atención a lo anterior, y a la decisión tomada por el comité de conciliación del Ministerio de Educación, citado en precedencia, la Procuraduría 135 Judicial II, consideró:

“(…) Sobre el anterior acuerdo conciliatorio este Despacho considera que contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento (siendo claro en relación con el concepto conciliado, cuantía y fecha para el pago).”

Respecto a los requisitos de la conciliación, la Procuraduría 135 Judicial II, refirió:

“De igual modo se observa que, el acuerdo reúne los siguientes requisitos:

- (i) El eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998);*
- (ii) El acuerdo conciliatorio versa sobre sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998);*
- (iii) Las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar;*
- (iv) Obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, a saber:*
 - Poder para actuar.*
 - Las Resoluciones de reconocimiento de cesantía de cada uno de los solicitantes.*

- *La constancia de pago efectivo de la cesantía de cada uno de los solicitantes.*
- *Copia de la reclamación de cada uno de los solicitantes.*
- *Poder para actuar de la apoderada de la convocada*
- *Certificaciones del Comité de Conciliación, con la propuesta conciliatoria para cada uno de los 27 casos. y*

(v) *en criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público.*

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos pertinentes, dentro de los tres días hábiles siguientes, al Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá (REPARTO), para efectos de control de legalidad, advirtiéndole a los comparecientes que el Auto aprobatorio junto con la presente acta del acuerdo, prestarán mérito ejecutivo, y tendrán efecto de cosa juzgada² razón por la cual no son procedentes nuevas peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por las mismas causas (art. 73 Ley 446 de 1998 y 24 Ley 640 de 2001)."

VI. CONSIDERACIONES

Esta Sede Judicial es competente para pronunciarse sobre la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado el 13 de julio de 2022, entre el señor ADOLFO ELEAZAR ROJAS PACHECO y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONCILIACIÓN.

Debe recordar el Despacho que la conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa ha sido instituida como un mecanismo alternativo de solución de conflictos con el ánimo de lograr (cuando a ello hubiere lugar) un acuerdo entre las partes y así evitar el uso de acciones contenciosas en vía judicial, o en su defecto, servir como requisito de procedibilidad para la iniciación de aquellas.

Conforme a la normatividad vigente, la CONCILIACIÓN es la manifestación de la voluntad de las partes, en este caso extrajudicial, ante un conflicto originado por actividad administrativa o en ejercicio de aquella, con refrendación del Procurador Judicial, la cual sólo surte efectos jurídicos con la ejecutoria de la decisión jurisdiccional que la aprueba. Esta decisión tiene efectos de COSA JUZGADA y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO (Artículo 13 del Decreto 1716 de 2009).

Desde la expedición de la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001, la conciliación se extendió hasta el campo de

esta jurisdicción, siendo procedente únicamente sobre aquellos conflictos de carácter particular y contenido económico que se encuentren en el ámbito de su competencia, susceptibles de ser enjuiciados con ocasión de las acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contractuales, y de reparación directa. Lo anterior, por estricto mandamiento del artículo 59 de la mencionada Ley 23 de 1991, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ARTICULO 59. Modificado por el art. 70, Ley 446 de 1998 Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.”

En desarrollo de las normas referenciadas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009 *“Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”*, obra que contiene la ordenación que rige el procedimiento conciliatorio extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo.

Así pues, ha de observarse que la solicitud de conciliación haya reunido los requisitos establecidos por el artículo 6 del Decreto 1716 de 2009, que son los siguientes:

“(…)
a) La designación del funcionario a quien se dirige;
b) La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso;
c) Los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan;
d) Las pretensiones que formula el convocante;
e) La indicación de la acción contencioso administrativa que se ejercería;
f) La relación de las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el proceso;
g) La demostración del agotamiento de la vía gubernativa, cuando ello fuere necesario;
h) La estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones;
i) La manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos;
j) La indicación del lugar para que se surtan las notificaciones, el número o números telefónicos, número de fax y correo electrónico de las partes.
k) La copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado, en la que conste que ha sido efectivamente recibida por el representante legal o por quien haga sus veces, en el evento de que sea persona jurídica, y en el caso de que se trate de persona natural, por ella misma o por quien esté facultado para representarla;
l) La firma del apoderado del solicitante o solicitantes;
“(…)”

De la misma manera, el Decreto No. 1365 del 27 de junio de 2013 “por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 1564 de 2012, relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, establece:

“Artículo 4. Entrega de copia de solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En desarrollo del artículo 613 de la Ley 1564 de 2012, el peticionario que solicite conciliación extrajudicial deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia cuando el asunto involucre intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2 del Decreto Ley 4085 de 2011 y el presente Decreto”.

Igualmente, de conformidad con el marco jurídico vigente, para efectos de impartir la aprobación prevista en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, el juez de conocimiento debe verificar que el acuerdo conciliatorio:

- a.** Verse sobre un asunto conciliable.
- b.** No afecte derechos fundamentales, ni atente contra el ordenamiento jurídico.
- c.** No sea lesivo para el patrimonio público.
- d.** No haya tenido como objeto asuntos en los cuales la acción a precaver se encuentre caducada.

2. CASO CONCRETO

En el caso objeto de análisis tenemos que:

2.1. La solicitud de conciliación extrajudicial elevada por el convocante y que obra en el expediente digital, cumple con los requisitos señalados por el Decreto 1716 de 2009.

2.2. El asunto aquí debatido es perfectamente conciliable, por cuanto si bien es cierto, los derechos laborales vistos a la luz de la Carta Constitucional de 1991 son derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, también lo es que se puso en discusión y que fue objeto de arreglo entre las partes involucradas, el derecho que le asiste al señor ADOLFO ELEAZAR ROJAS PACHECO, frente al pago de la sanción moratoria como consecuencia del pago de las cesantías parciales, fuera de los términos legales.

2.3. El asunto conciliado versa sobre un derecho de contenido particular y económico y por tanto de libre disposición por las partes, sin que con ello se afecte derecho fundamental alguno o vaya contra la Ley o la jurisprudencia, toda vez que proviene de una obligación contraída por las partes conforme a la normatividad existente en materia laboral.

2.4. El acuerdo aquí celebrado no resulta lesivo para el patrimonio público, por cuanto la entidad convocada tiene el deber de reconocer a la convocante, el derecho que le asiste al pago del valor correspondiente a la sanción por la mora en el pago de la cesantía parcial que solicitó, pero al llegar a un arreglo con la parte interesada, previo a iniciar una acción judicial se está evitando condenas y perjuicios a futuro, como el pago de intereses moratorios o los gastos en que tendría que incurrir para defensa de la entidad dentro del proceso, e incluso una posible condena en costas y agencias en derecho.

2.5. Por tratarse de un acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no es preciso hablar de caducidad de la acción. (Literal d), del numeral 1 del art. 164 del CPACA).

3. MARCO NORMATIVO SANCION MORATORIA:

Analizada la normatividad aplicable a la sanción moratoria, por la tardanza en el pago de las cesantías conforme lo dispuesto por la Ley 1071 de 2006, vemos que en sus artículos 4 y 5, dispone:

“ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.” (Subrayado fuera de texto).

El plazo en comento se consagró de manera perentoria, previendo que su incumplimiento da lugar a una indemnización moratoria, consistente en el pago de

un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.

Recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió el 18 de julio de 2018, la Sentencia de unificación por importancia jurídica¹ en la que precisó las hipótesis sobre la exigibilidad de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, así:

“i) Hipótesis de falta de pronunciamiento, o pronunciamiento tardío.-

83. Sobre el particular, la Sección Segunda evidencia con relación al reconocimiento de la sanción moratoria tanto a docentes del sector oficial, como a la generalidad de los servidores públicos, que aún falta por precisar el momento a partir del cual se hace exigible la sanción por mora en el evento en que la administración guarde silencio frente a la solicitud de reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas, o se pronuncie de manera tardía.

(...)

92. Es preciso indicar así, que el establecimiento de un término para el reconocimiento de la cesantía y de otro para que se efectúe su pago efectivo, busca proteger al trabajador garantizando el cometido de tal prestación, y que justamente con ella, se pueda solventar la eventualidad para la cual la solicitó -parciales- o por la que se causó -definitivas-.

93. Así las cosas, no pueden confundirse los mencionados términos de expedición del acto de reconocimiento de la cesantía y de su pago efectivo, con el previsto por el legislador con el propósito de configurar una decisión presunta resultado del silencio administrativo, y menos para entender causada por ésta la sanción por mora; pues, ésta penalidad se encuentra justificada por el simple incumplimiento de la obligación de pago, no por la ficción legal de que la petición que sobre tal prestación se hizo no tuvo respuesta, asumiéndola como negativa por definición. 94. En criterio de la Sala, éste debe ser el real entendimiento de la sanción moratoria por no expedir el acto de reconocimiento en término, pues lo contrario sería asumir que la simple inacción de la administración impediría la causación de la penalidad analizada en esta sentencia, en detrimento de la filosofía de la cesantía y de los derechos del trabajador.

95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/200622), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 201123) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 5124], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 SUJ-012-S del 18 de julio de 2018 Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) Actor: Jorge Luis Ospina Cardona Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

ii) Hipótesis de acto escrito que reconoce la cesantía. -

96. Teniendo claridad sobre la regla que procede para calcular la sanción moratoria por falta de expedición del acto de reconocimiento, o siendo tardío, adicionalmente deberá la Sala analizar la causación de la penalidad en el evento de que exista acto escrito de parte de la administración que reconoce la cesantía, si se notifica o no, a través de qué medio o, si se renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, considerando que éstos son los momentos en que legamente se inicia el término para controvertirlo y después verificar el pago oportuno de la cesantía.

97. Debe partirse de la base que se está ante el acto administrativo escrito que reconoció la cesantía expedido dentro de los 15 días que se tienen para resolver el asunto. Es de considerar, que este acto al ser de naturaleza particular debe ser notificado personalmente²⁶ en los términos del artículo 6727 del CPACA, para lo cual el ente gubernativo tuvo que consultar el contenido de la petición sobre el particular, esto es, si el peticionario habilitó la notificación por medio de electrónico, en cuyo caso, se surtirá a través de éste medio; o si por el contrario deberá acometerse conforme a la norma procesal.
(...)

102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos señalados. (...)

109. Siguiendo esta misma línea, se encuentra la hipótesis de cuando el peticionario renuncia expresamente a los términos de notificación y de ejecutoria, procurando así un ágil cumplimiento del acto que le reconoce la cesantía, adquiriendo firmeza a partir de la fecha en que haga tal manifestación, al tratarse de oportunidades asociadas al debido proceso que le permite enterarse de la decisión y controvertirla. En este caso, los 45 días para que se produzca el pago de la cesantía reconocida, corren a partir del día siguiente en que renuncia a los términos de notificación y ejecutoria. (...)

111. En las mencionadas situaciones, los términos de notificación y de ejecutoria no corren para sanción moratoria...”

Acorde con dicho precedente, se debe analizar cada caso en concreto a efectos de establecer el cómputo para la sanción moratoria, de suerte que si el acto administrativo de reconocimiento es proferido dentro del término legal conferido, los 45 días para el pago de las cesantías comienzan a contarse desde su firmeza; pero si el acto se expide fuera del término, por culpa de la entidad y no del solicitante, el tiempo comienza a contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición, es decir, 15 días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más 10 días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, más 45 días hábiles a partir

del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 70 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.

De acuerdo con el material probatorio allegado se tiene que el señor ADOLFO ELEAZAR ROJAS PACHECO, en su condición de docente oficial el día 3 de mayo de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de una cesantía parcial, tal y como se indica en la Resolución No. 6660 del 10 de marzo de 2019, mediante la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaria de Educación del Distrito, reconoció y ordenó el pago de le cesantía parcial solicitada por el actor y el dinero fue puesto a disposición para el pago el 28 de agosto de 2019.

Dando aplicación a los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006, y el precedente citado, se concluye que, en el presente caso se configuró la mora en el pago de la cesantía parcial reconocida a la actora, toda vez que la expedición del acto y pago se hizo por fuera del plazo establecido, en consecuencia, se determinarán los días de mora, así:

Término	Fecha	Caso concreto
Fecha de la reclamación de las cesantías parciales	03/05/2019	Fecha de reconocimiento: 10/07/2019 Resolución No. 6660 Fecha en que se puso a disposición los dineros: 28/08/2019 Período de mora: 16/08/2019 a 27/08/2019
Vencimiento del término para el reconocimiento - 15 días (Art. 4 L. 1071/2006)	24/05/2019	
Vencimiento del término de ejecutoria – 10 días (Arts. 76 y 87 CPACA)	10/06/2019	
Vencimiento del término para el pago - 45 días (Art. 5 L. 1071/2006)	15/08/2019	

La Resolución de reconocimiento de la prestación, se profirió de manera tardía por parte de la entidad accionada, pues, ella contaba con quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de la prestación por el actor, es decir, que tenía hasta el 24 de mayo de 2019, para expedirla, y lo hizo, solo hasta el 10 de julio de 2019.

Es así que en este caso, el tiempo a partir de la cual empieza a correr el término, para que se genere la indemnización moratoria, deberá contarse desde el día en que la actora radicó la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías, es decir, desde el 3 de mayo de 2019, ya que, la fecha límite que tenía la entidad accionada

para realizar dicho pago, sin incurrir en mora, era el 15 de agosto de 2019, momento desde el cual, debe computarse la sanción solicitada.

Por lo tanto, el período va desde el 16 de agosto de 2019, hasta el 27 de agosto de 2019, día anterior a que la entidad puso a disposición el dinero para el pago. De esta manera, se tiene que la entidad incurrió en mora de 12 días, los cuales está obligada a pagar, en forma independiente al monto de las cesantías y con sus propios recursos.

Por lo tanto, este despacho concluye que el acuerdo al que llegaron las partes se ajusta a derecho y que no resulta lesivo al patrimonio público, toda vez que el reconocimiento realizado no supera el valor al que tendría derecho el actor por concepto de la sanción moratoria que se reclama; toda vez que el acuerdo final de las partes fue por la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1.366.260)**, motivo por el cual aprobará el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor ADOLFO ELEAZAR ROJAS PACHECO y la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, pues se satisfacen los requisitos exigidos para disponer del presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría 135 Judicial II para Asuntos Administrativos, llevada a cabo el 13 de julio de 2022, entre el señor ADOLFO ELEAZAR ROJAS PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía 40.041.298 y el NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1.366.260)**, en la forma y términos indicados en el acta de conciliación extrajudicial y conforme a las consideraciones aquí expuestas.

SEGUNDO: Por secretaría, expídase a la parte convocante copia auténtica que presta mérito ejecutivo del acuerdo conciliatorio y de la presente providencia junto con su respectiva constancia de ejecutoria.

TERCERO: Por secretaría, expídase copia auténtica del acuerdo conciliatorio y de la presente providencia, con constancia de ejecutoria, destinada a la entidad convocada.

CUARTO: Reconocer personería adjetiva al abogado Julián Andrés Giraldo Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía 10.268.011 y portador de la tarjeta profesional 66.637 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del convocante, de conformidad con el poder aportado.

Por Secretaría, dispóngase lo pertinente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

JNE

**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

**Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior
Hoy 11 de noviembre de 2022 a las 8:00 a.m.**

Convocante:	deyapena@giraldoabogados.co notificacionesbogota@giraldoabogados.com.co
Convocada MINISTERIO DE EDUCACIÓN	t_amolina@fiduprevisora.com.co notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co

Ministerio Público: Procuraduría 191 Judicial I Para Asuntos Administrativos Procuraduría 135 Judicial II Para Asuntos Administrativos	procjudadm191@procuraduria.gov.co procjudadm135@procuraduria.gov.co
---	--